

## **Documento de Tanquem els Cies, Sos Racisme y Fundació Migra Studium dirigido a los grupos parlamentarios en el marco del "Grupo de trabajo de revisión del modelo de los CIE" del Parlamento de Cataluña**

Tras años de trabajo cotidiano por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos y de protección de los derechos de las personas migrantes en primer lugar logramos romper el silencio y la opacidad que rodeaba a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

Entendemos que fruto de dicho trabajo y gracias a la implicación de importantes actores de la sociedad civil y al compromiso de algunos responsables y grupos políticos se ha constituido, en el marco de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento de Cataluña el "Grupo de trabajo de revisión del modelo de los CIE"

Entendemos que estamos ante una oportunidad histórica de iniciar un camino firme hacia conseguir un cambio de paradigma en las políticas de extranjería y migratorias, pasando de entender la inmigración como un problema a concebir las migraciones como un derecho y como un fenómeno social complejo y consustancial con cualquier sistema social de cualquier época histórica.

Desde nuestras organizaciones, que llevan años trabajando esta materia, queremos aportar el presente documento a consideración de todos los grupos parlamentarios. En el mismo, realizamos un análisis de la situación y realizamos una serie de propuestas para que sean incluidas en las conclusiones del Grupo de Trabajo si así se considera conveniente.

En los últimos años, gracias al trabajo persistente y la implicación progresiva de un gran número de agentes sociales, jurídicos y políticos se han logrado mejoras importantes en las condiciones de las personas privadas de libertad que para el caso del CIE de Zona Franca podemos concretar: que se implementen los Juzgados de Control de los CIES, los cuales están teniendo un papel fundamental para garantizar derechos a la población internada en estos establecimientos; el acceso de las organizaciones sociales al CIE, la ampliación de los horarios y de la calidad en

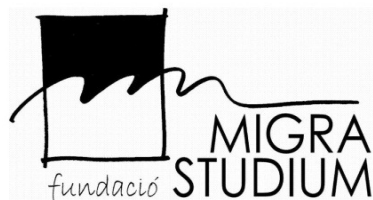


las visitas con familiares; la implantación de un sistema de videovigilancia efectivo que cubre la mayor parte de los espacios; la mejora parcial de la asistencia sanitaria; la implantación de un servicio de orientación jurídica a cargo de letrados del colegio de abogados; la retirada de las mamparas en las salas de comunicación; y la reducción, en el último año, del número de denuncias por malos tratos o torturas en el CIE de Barcelona.

Sin embargo, en la actualidad quedan muchos aspectos que siguen vulnerando los derechos de los internos. Vulneraciones en gran parte motivadas por la aprobación de un Reglamento de funcionamiento de los CIEs, aprobado por Real Decreto el 14 de marzo de 2014, con 28 años de retraso, que no garantiza adecuadamente los derechos de las personas internas ya que otorga de nuevo un amplio margen de arbitrariedad a los directores de los CIEs y no introduce elementos esenciales que ya habían sido garantizados a través de las resoluciones de los Jueces de Control.

Las organizaciones que suscriben este documento queremos poner de manifiesto que si bien es cierto que queremos que se respeten los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en los CIEs, nuestro objetivo es que podamos estar orgullosos de una sociedad que decida dejar de privar de libertad a personas por el mero hecho de no tener su situación administrativa de extranjería regularizada. Más allá de que en ellos se violen y lesionen vulneren derechos humanos concretos, su mera existencia es completamente vulneradora. Y queremos que, con ello, se abra un proceso para realizar un cambio de paradigma en cuanto a las políticas en materia de migraciones.

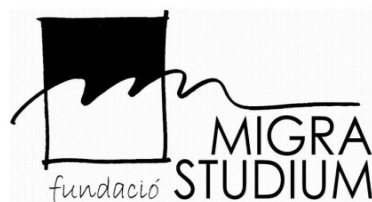
Asimismo, consideramos que es necesario romper la creencia de que la competencia para cerrar los CIEs es de la Unión Europea y que, bajo el actual marco normativo europeo en el Estado Español, éstos no se podrían cerrar. La directiva de retorno de la UE, en su artículo 14.1, establece que “los Estados miembros *podrán* mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno”. Por lo tanto, no existe ninguna obligación de que en el Estado Español o en cualquier otro de la UE tenga que haber CIEs. Simplemente, esta directiva establece que *podrán* existir estos centros. Por lo tanto, sin cambiar una coma de la legislación europea, mañana, con mayoría y voluntad política, se podrían cerrar los CIEs.



Otro aspecto importante es clarificar si los CIEs son útiles y necesarios en términos de la actual política migratoria, más allá del debate de fondo sobre la misma que es necesario abordar. En primer lugar, cabe destacar que del total de personas internadas en 2013, tan sólo el 52,49% fueron efectivamente expulsadas. Asimismo, un gran número de ellas podrían haber sido deportadas directamente desde un centro penitenciario, ya que se trata de sustituciones de condena penal. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué volumen de movimientos migratorios negativos (retornos) suponen las deportaciones forzosas en relación con los movimientos migratorios no forzosos? El total de deportaciones realizadas en 2013 (23.889) representa tan sólo el 6% de los movimientos migratorios de retorno no forzoso (396.658). Y el total de deportaciones forzosas realizadas desde los CIEs (9.002) no llega a representar ni el 1% de los retornos no forzosos que se produjeron ese mismo año. Es decir, que sin cambiar un ápice de los objetivos y principios de las políticas de extranjería se podrían cerrar los CIEs con carácter inmediato y el impacto en los flujos migratorios sería prácticamente inexistente.

A esto se suma la necesidad de tener en cuenta los altos costes que se están destinando a la detención, internamiento y deportación de personas migrantes. En el año 2013 se destinaron 11 millones de euros tan sólo a vuelos colectivos de deportación. El coste medio por persona internada, a pesar de que no hay datos públicos, se sitúa en los 100 euros diarios, sin contar el coste de las infraestructuras.

Finalmente, no podemos obviar la conexión entre el uso de controles policiales basados en perfiles étnicos, los vuelos de deportación y el aumento de los internamientos en el CIE. Estos **controles son ilegítimos, discriminatorios, racistas e injustos, vulneran derechos fundamentales, atentan contra la dignidad, contra el derecho a la libre circulación de las personas e incumplen los criterios fijados en la legalidad vigente**, socavando los principios del Estado de derecho. Por tanto son ilegales, pero aún en el supuesto de que no lo fueran seguirían teniendo el mismo carácter injusto ya que su aplicación produce segregación social, levantan fronteras internas y potencian la diferenciación social entre la población autóctona y la extranjera. Y debido a ello, genera un imaginario estigmatizador que relaciona migración y delincuencia, presentando a la población migrada como malhechores y enemigos, siempre bajo



sospecha, lo que origina xenofobia y racismo social. La alta frecuencia de los controles refuerza la sensación de inseguridad y provoca una alarma social fabricada artificialmente, degradando la convivencia y la cohesión social en los barrios.

**Por todo ello, las entidades que suscriben el presente documento instan a los grupos parlamentarios a incluir entre las conclusiones del "Grupo de trabajo de revisión del modelo de los CIE" las siguientes:**

1. Que el Parlamento inste a los Ayuntamientos, al Conseller de Interior, y al Ministerio del Interior a que cesen con carácter inmediato los controles policiales basados en el perfil étnico de las personas en Cataluña.

2. Que el Parlamento inste al Ministerio del Interior a que:

a- Tal y como determina la Ley de Extranjería, se priorice el procedimiento ordinario de expulsión y no el preferente, así como que no realice detenciones de personas por el mero hecho de no tener la situación administrativa regularizada.

b- A acometer las siguientes mejoras en la garantía de los derechos de las personas internadas en los CIES:

- Que tal y como se establece en Auto de Jueces de Control de Barcelona se instalen de manera inmediata baños en el interior de las celdas.

- Que se realice un Convenio entre la Sanidad Pública y el Centro de Internamiento de Extranjeros para que la asistencia sanitaria sea proporcionada por el sistema público dentro del mismo centro y se garantice un servicio durante las 24 horas del día.

- Que se adecúen salas para garantizar las visitas "vis a vis" familiares e íntimos en el CIE de Barcelona, tal y como se garantizan en los centros penitenciarios. Los niños tienen que tener un espacio adecuado para relacionarse con sus progenitores y las parejas han de tener un espacio de intimidad real.

- Que se avise a las personas internas con antelación del día, hora y lugar de salida del vuelo a los efectos de garantizar la posibilidad de encarar psicológicamente la deportación y de poder despedirse adecuadamente de sus seres queridos.



- Que se garante que los abogados y familiares puedan telefonar a las personas privadas de libertad en los CIEs. Asimismo, que se amplíe el número de cabinas telefónicas en el mismo, así como se garante que las personas sin recursos podrán comunicarse con sus familiares y abogados.
- Que se garante un servicio de traducción para las personas que son internadas en el CIE de Barcelona en el momento en que se produzca su internamiento y para que pueda entrevistarse con su representación letrada o las entidades sociales con que contacte su representación letrada.
- Que se garante que todas las personas susceptibles de solicitar protección internacional sean informadas de este derecho y del procedimiento para hacerlo.

c- A derogar el Protocolo de Deportación de la Policía Nacional de 2007 que permite, entre otras medidas vulneradoras de derechos, la sedación forzosa, atar con correas a las personas que van a ser deportadas, así como ser inmovilizadas con una camisa de fuerza.

3. Que el Parlamento inste a que el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Consejo General de la Abogacía a que aborden, conjuntamente con la opinión de la sociedad civil, un sistema que garante el derecho de defensa y la asistencia letrada a las personas con orden de expulsión a las que se les vaya a practicar una deportación forzosa sin internamiento en CIE. Que se inste a que cesen las *deportaciones exprés*, mediante las cuales la policía deporta a personas bajo un régimen de detención de 72 horas, sin previo aviso y sin que medie ningún tipo asistencia letrada.

4. Que el Parlamento inste a la Dirección General de la Policía de Cataluña para que sea proactiva a la hora de investigar eventuales situaciones de malos tratos o de tortura en el CIE de Barcelona o en el momento de la deportación.



5. Que el Parlamento de Cataluña inste al Gobierno de la Generalitat para que:
- a. Derogue las instrucciones 1/2011 y 1/2013 sobre extranjería en centros penitenciarios que ha generado un sistema de discriminación en las prisiones de Cataluña para las personas extranjeras, que ven denegadas de manera sistemática el acceso al tercer grado, el disfrute de permisos de salida o el acceso a programas de tratamiento penitenciario.
  - b. En base al art 15 y 25 de la CE, a que cuando una persona privada de libertad en un centro penitenciario cumpla su condena no sea entregada a la Policía Nacional el día de su licenciamiento de condena, a efectos de impedir una situación de doble condena totalmente discriminatoria y desproporcionada
6. Que el Parlamento inste al Gobierno del Estado Español a que se inicie un proceso que lleve al cierre de los Centros de Internamientos de Extranjeros. En concreto, que inste al Gobierno del Estado Español a que en el plazo más breve posible y en un máximo de seis meses acuerde el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona.
7. Que el Parlamento inste a que en el marco del proceso de transición nacional se cree un comité de expertos para realizar una propuesta sobre el marco de políticas de extranjería y migratorias que tendría un eventual estado independiente catalán, en el cual participen de manera activa las organizaciones de defensa de los derechos humanos.



## **Document de Tanquem els Cies, Sos Racisme i Fundació Migra Studium dirigit als grups parlamentaris en el marc de el "Grup de treball de revisió del model dels CIE" del Parlament de Catalunya**

Després d'anys de treball quotidià per part d'organitzacions de defensa dels drets humans i de protecció dels drets de les persones migrants, hem aconseguit trencar el silenci i l'opacitat que envoltava als Centres d'Internament d'Estrangers (CIE).

Entenem que com a fruit d'aquest treball, i gràcies a la implicació d'importants actors de la societat civil i al compromís d'alguns responsables i grups polítics, s'ha constituït, en el marc de la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya el "Grup de treball de revisió del model dels CIE"

Entenem que estem davant una oportunitat històrica d'iniciar un camí ferm cap a aconseguir un canvi de paradigma en les polítiques migratòries i d'estrangeria, passant d'entendre la immigració com un problema a concebre les migracions com un dret i com un fet social complex i consubstancial a qualsevol sistema social de qualsevol època històrica.

Des de les nostres organitzacions, que porten anys treballant aquesta qüestió, volem aportar el present document a tots els grups parlamentaris. En ell volem fer una anàlisi de la situació i aportar una sèrie de propostes perquè siguin incloses en les conclusions del Grup de Treball si així es considera convenient.

En els últims anys, gràcies al treball persistent i la implicació progressiva de gran nombre d'agents socials, jurídics i polítics s'han aconseguit millores importants en les condicions de les persones privades de llibertat, que en el cas del CIE de la Zona Franca podem concretar així: la implementació dels Jutjats de Control dels CIES, els quals estan tenint un paper fonamental a l'hora de garantir els drets de les persones tancades en aquests centres; l'accés de les organitzacions socials al CIE, l'ampliació dels horaris i de la qualitat en les visites amb familiars; la implantació d'un sistema de videovigilància que cobreix la major part dels espais; la millora parcial de l'assistència sanitària; la implementació d'un servei d'orientació jurídica a càrrec de lletrats del col·legi d'advocats; la retirada de les mampares a les sales de comunicació i la reducció, durant l'últim any, del nombre de denúncies per maltractaments i tortures en el CIE de Barcelona.

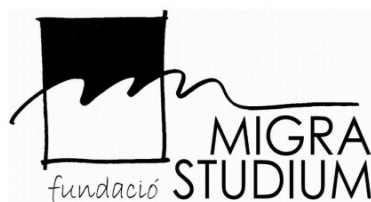


No obstant això, en l'actualitat queden molts aspectes que segueixen vulnerant els drets dels interns. Vulneracions en gran part motivades per l'aprovació d'un Reglament de funcionament dels CIEs, aprovat per Reial decret el 14 de març de 2014, amb 28 anys de retard, que no garanteix adequadament els drets de les persones internes ja que atorga de nou un ampli marge d'arbitrarietat als directors dels CIEs i no introdueix elements essencials que ja havies estat garantits a través de les resolucions dels Jutges de Control.

Les organitzacions que subscriuen aquest document volem posar de manifest que si bé és cert que volem que es respectin els drets fonamentals de les persones privades de llibertat als CIEs, el nostre objectiu és que puguem estar orgullosos d'una societat que decideixi deixar de privar de llibertat a persones pel simple fet de no tenir la seva situació administrativa de residència regularitzada. Més enllà del fet que en ells es violen i lesionin drets humans, la seva mera existència és completament vulneradora. I volem que, amb això, s'obri un procés per realitzar un canvi de paradigma pel que fa a les polítiques en matèria de migracions.

Així mateix, considerem que és necessari trencar la creença que la competència per tancar els CIEs és de la Unió Europea i que, sota l'actual marc normatiu europeu en l'Estat Espanyol, aquests no es podrien tancar. La directiva del retorn de la UE, en el seu article 14.1, estableix que "els Estats membres *podran* mantenir internats als nacionals de tercers països que siguin objecte de procediments de retorn". Per tant, no existeix cap obligació que a l'Estat Espanyol o a qualsevol un altre de la UE hagi d'haver-hi CIEs. Simplement, aquesta directiva estableix que *podran* existir aquests centres. Per tant, sense canviar una coma de la legislació europea, demà mateix, amb majoria i voluntat política, es podrien tancar els CIEs.

Un altre aspecte important és aclarir si els CIEs són útils i necessaris per dur a terme l'actual política migratòria, més enllà del debat de fons sobre aquesta política que és necessari abordar. En primer lloc, cal destacar que del total de persones internades en 2013, només el 52,49% van ser efectivament expulsades. Així mateix, un gran nombre d'elles podrien haver estat deportades directament des d'un centre penitenciari, ja que es tracta de substitucions de condemna penal. Però anem una mica més enllà. Quin volum de moviments migratoris negatius (retorns)





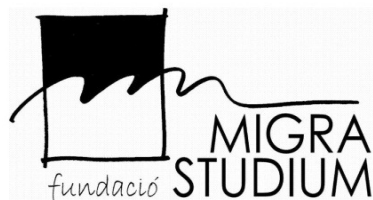
suposen les deportacions forçoses en relació amb els moviments migratoris no forçosos? El total de deportacions realitzades en 2013 (23.889) representa tan sols el 6% dels moviments migratoris de retorn no forçós (396.658). I el total de deportacions forçoses realitzades des dels CIEs (9002) no arriba a representar ni l'1% de les retorns no forçosos que es van produir aquest mateix any. És a dir, sense canviar un àpex dels objectius i principis de les polítiques d'estrangeria es podrien tancar els CIEs amb caràcter immediat i l'impacte sobre els fluxos migratoris seria pràcticament inexistent.

A això s'afegeix la necessitat de tenir en compte els alts costos que s'estan destinant a la detenció, internament i deportació de persones migrants. L'any 2013 es van destinar 11 milions d'euros tan sols a vols col·lectius de deportació. El cost mitjà per persona internada, tot i no haver-hi dades públiques, se situa en els 100 euros diaris, sense comptar el cost de les infraestructures.

Finalment, no podem obviar la connexió entre l'ús de controls policials basats en perfils ètnics, els vols de deportació i l'augment dels internaments en el CIE. Aquests **controls són il·legítims, discriminatoris, racistes i injusts, vulneren drets fonamentals, atempten contra la dignitat, contra el dret a la lliure circulació de les persones i incompleixen els criteris fixats en la legalitat vigent**, soscavant els principis de l'Estat de dret. Per tant són il·legals, però encara en el cas que no ho fossin seguirien tenint el mateix caràcter injust, la seva aplicació produeix segregació social, aixequen fronteres internes i potencien la diferenciació social entre la població autòctona i l'estrangera. Generant un imaginari estigmatitzador que relaciona migració i delinqüència, presentant a la població migrada com a malfactors i enemics, sempre sota sospita, la qual cosa origina xenofòbia i racisme social. L'alta freqüència dels controls reforça la sensació d'inseguretat i provoca una alarma social fabricada artificialment, degradant la convivència i la cohesió social als barris.

**Per tot això, les entitats que subscriuen el present document insten als grups parlamentaris a incloure entre les conclusions del "Grup de treball de revisió del model dels CIE" les següents consideracions:**

1. Que el Parlament insti als Ajuntaments, al Conseller d'Interior, i al Ministerio del Interior a aturar amb caràcter immediat els controls policials que es realitzen a Catalunya basats en el perfil ètnic de les persones



2. Que el Parlament insti al Ministerio del Interior a que:

a. A prioritzar, tal com determina la Llei d'Estrangeria, el procediment ordinari d'expulsió per sobre del preferent, així com que no es realitzin detencions de persones pel simple fet de no tenir la situació administrativa regularitzada.

b. A escometre les següents millores en la garantia dels drets de les persones internades en els CIES:

- Que tal com s'estableix en Acte de Judges de Control s'instal·lin de manera immediata banys a l'interior de les cel·les.

- Que es realitzi un Conveni entre la Sanitat Pública i el Centre d'Internament d'Estrangers perquè l'assistència sanitària sigui proporcionada pel sistema públic dins del mateix centre i es garanteixi un servei durant les 24 hores del dia.

- Que s'adeqüïn sales per garantir les visites "vis a vis" de familiars i íntims en el CIE de Barcelona, tal com es garanteixen als centres penitenciaris. Els nens han de tenir un espai adequat per relacionar-se amb els seus progenitors i les parelles han de tenir un espai d'intimitat real.

- Que s'avisí a les persones internes amb antelació del dia, hora i lloc de sortida del vol a l'efecte de garantir la possibilitat d'encarar psicològicament la deportació i de poder acomiadar-se adequadament dels seus éssers estimats.

- Que es garanteixi que els advocats i familiars puguin telefonar a les persones privades de llibertat en els CIEs. Així mateix, que s'ampliï el nombre de cabines telefòniques que garanteixin que les persones sense recursos puguin comunicar-se amb els seus familiars i advocats.

- Que es garanteixi un servei de traducció a les persones en el moment del seu internament al CIE de Barcelona, perquè puguin entrevistar-se amb la seva representació lletrada i/o amb les entitats socials amb qui contacti.

- Que es garanteixi que totes les persones susceptibles de sol·licitar protecció internacional siguin informades d'aquest dret i del procediment per demanar-ho.

c. A derogar el Protocol de Deportació de la Policia Nacional de 2007 que permet, entre altres mesures que vulneren drets, la sedació forçosa, lligar amb corretges a les persones que van a ser deportades, així com ser immobilitzades amb una camisa de força.



3. Que el Parlament insti al Consell General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior i el Consell General de l'Advocacia a que abordin conjuntament, amb l'opinió de la societat civil, un sistema que garanteixi el dret de defensa i l'assistència lletrada a les persones amb ordre d'expulsió a les quals se'ls vagi a practicar una deportació forçosa sense internament en CIE. Que s'insti a que cessin les *deportacions exprés*, mitjançant les quals la policia deporta a persones sota un règim de detenció de 72 hores, sense previ avís i sense que intervingui cap tipus d'assistència lletrada.

4. Que el Parlament insti a la Direcció General de la Policia de Catalunya perquè sigui proactiva a l'hora d'investigar eventuais situacions de maltractaments o de tortura en el CIE de Barcelona o al moment de la deportació.

5. Que el Parlament de Catalunya insti al Govern de la Generalitat perquè derogui:

a. La instrucció 1/2011 i 1/2013 sobre estrangeria en centres penitenciaris que ha generat un sistema de discriminació a les presons de Catalunya per a les persones estrangeres, que veuen denegades de manera sistemàtica l'accés al tercer grau, el poder gaudir de permisos de sortida o l'accés a programes de tractament penitenciari.

b. Sobre la base del art. 15 i 25 de la CE, al fet que quan una persona privada de llibertat en un centre penitenciari compleixi la seva condemna no sigui lliurada a la Policia Nacional el dia en que finalitza la seva condemna, a fi i efecte d'impedir una situació de doble condemna totalment discriminatòria i desproporcionada.

6. Que el Parlament insti al Govern de l'Estat Espanyol a que s'iniciï un procés que porti al tancament dels Centres d'Internaments d'Estrangers. En concret, que insti al Govern de l'Estat Espanyol al fet que en el termini més breu possible i en un màxim de 6 mesos tanqui el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona.

7. Que el Parlament insti a que en el marc del procés de transició nacional es creï un comitè d'experts que realitzi una proposta sobre el marc de polítiques d'estrangeria i migratòries d'un eventual estat independent català, comitè que s'obri a la participació activa de les organitzacions en defensa dels drets humans.

